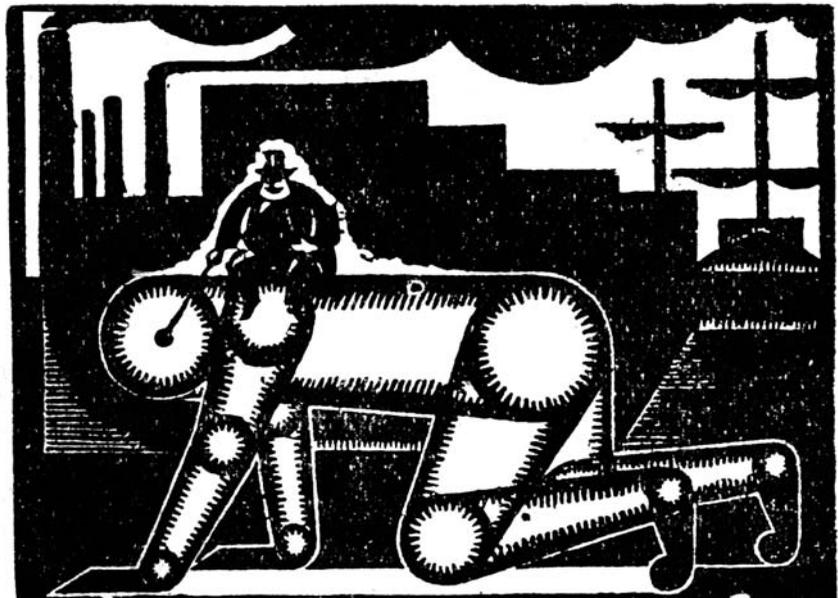


**De coimeros, marxistas
y privatizaciones
en el siglo XIX.**

El Obrero y la crisis del '90

Israel Lotersztain



Albert Daenens

Los lectores del nº 29 (del 18 de julio de 1891) del primer periódico marxista argentino, el apasionante *El Obrero*, se deben haber sentido impactados con el titular que encabezaba uno de sus principales artículos: "Jaque mate. El ex Presidente Juárez Celman y su Ministro del Interior Eduardo Wilde denunciados por coimeros". Y pese a que pasaron tantos años no podemos menos que meditar que, cuando Argentina debe renegociar a comienzos del siglo XXI contratos y tarifas con las empresas privatizadas de servicios públicos de nuestro país, puede resultar muy instructivo recordar en base a *El Obrero* lo ocurrido unos cien años atrás.

Y debemos comenzar por recordar que la de 1990 no fue la primera ola privatizadora que la Argentina debió soportar a lo largo de su historia: la llegada al poder de Miguel Juárez Celman casi exactamente un siglo antes, en 1886, trajo consigo una actitud similar y basada en idénticos argumentos: que el Estado es un pésimo administrador, que el dinero de las ventas de los activos públicos podría ayudar a cancelar la elevada deuda externa, que el privado que se haría cargo del servicio sin duda lo brindaría con mucha mayor calidad y en forma más eficiente, etc., etc. La similitud de argumentaciones tan conocidas para nosotros realmente asombra y hasta abruma cuando se leen los diarios de la época, pero lo que llama la atención con referencia a 1886 es que por entonces no existía ese clima de histeria privatizadora que invadió a las clases medias y altas argentinas en 1990. Si bien algún ferrocarril estatal funcionaba por aquellos años inadecuadamente, otros, como el Ferrocarril Oeste, los trenes eran un ejemplo unánimemente reconocido de un excelente servicio, buen trato al pasajero, con las tarifas más bajas del mercado y constantes ganancias aportadas al tesoro provincial. Pero lo que más llama retrospectivamente la atención y más resistencias provocó en su momento, fue la privatización de las Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires. La opinión pública estaba masivamente en contra de la idea, las Obras Sanitarias (las primeras en Sudamérica) eran una especie de orgullo local. Es que proyectadas y dirigidas en Argentina, avanzaban rápida y eficientemente en su ejecución y funcionaban por demás adecuadamente, las tarifas eran razonables, etc. El mismísimo Julio A. Roca, ex Presidente y

líder del oficialista PAN, se expresaba elocuentemente en su correspondencia: "es un proyecto desgraciado. Yo aconsejé en contra pero no me hicieron caso. Las bullas y resistencias que se han levantado me prueban que yo tenía razón. *A estar por estas teorías de que los gobiernos no saben administrar llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la Aduana, al Correo, al telégrafo, a los puertos, a las oficinas de renta, al Ejército, y a todo lo que constituye el ejercicio y los deberes del poder...*" (el subrayado es mío).

Pero, y por razones que analizaremos al final de esta nota, contra todo lo que parecía sensato, fue imposible detener el ímpetu privatizador de Juárez Celman, quien envió al Congreso a su mejor colaborador y quizá por entonces el polemista argentino más brillante, el Ministro del Interior Eduardo Wilde, quien tuvo ante sí la ímprobable tarea de convencer a los legisladores para que aprobaran el proyecto. Y pese a su elocuencia y a la aplastante mayoría oficialista muchísimos diputados se rebelaron (especialmente entre los porteños y bonaerenses) y el proyecto sólo pudo ser aprobado por un escaso margen. La concesión por 45 años la recibió en junio de 1888 una empresa inglesa subsidiaria de la Baring: The Buenos Aires Supply and Drainage Co., a cambio de 21 millones de pesos oro. La casa bancaria se comprometió a suscribir el empréstito necesario para el pago de esta suma en tres cuotas y para proveer los fondos requeridos para la continuación de las obras.

La privatización fue un fracaso por muy diversas razones, no sólo locales sino también extranjeras. En Londres, Lord Baring intentó una peligrosa maniobra especulativa reteniendo por largo tiempo los títulos antes de lanzarlos al mercado, esperando una suba que le produjera enormes beneficios. Pero tuvo realmente mala suerte: cuando finalmente los puso a la venta, llegaban a Londres las primeras noticias de la crisis argentina que terminaría por estallar en 1890 (y cuya gravedad recuérdese que dio origen a la fallida Revolución y a la apresurada salida de Juárez Celman del poder). Por ello, Lord Baring tan solo pudo colocar un 35% de las acciones de la emisión y debió afrontar el resto con fondos propios. Esto, unido a la fuerte exposición de la tradicional Casa Bancaria en títulos de nuestro país, la hizo

tambalearse fuertemente al producirse la debacle argentina, y tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra para salvarla, pero la tercera cuota para completar los 21 millones no pudo ser abonada.

En Buenos Aires, por otro lado, la actitud de la población hacia el proyecto era pésima. Todos estaban convencidos de que se trataba de un gigantesco negociado, se negaban a aceptar las elevadas tarifas exigidas por la empresa (del mismo modo que ciento diez años más tarde, el concesionario pretendía cobrar en divisas frente a la devaluación de la moneda local), se discutía la calidad del servicio, las denuncias (entre otros, las que sistemáticamente aparecían en *El Obrero*) sobre la falta de salubridad del agua corriente eran una constante, etc. Finalmente la concesión tuvo que ser rescindida y la administración Pellegrini arribó en 1891 a un trabajoso acuerdo en tal sentido con la empresa adjudicataria.

Pero también por entonces la Argentina estaba en *default* (y lo estaría técnicamente por otros 15 años), y un arreglo con un país en *default* es inevitablemente muy poco satisfactorio y en particular en este caso implicaba el pago en dudosos bonos de largo plazo que, dada la delicada situación de la Casa Baring, ponían en peligro toda la inversión de los que habían adquirido el 35% de la emisión. Estos accionistas, como era habitual en Londres por entonces, se reunieron furiosos para protestar y recibir explicaciones en un local de la Bolsa londinense destinado a tal efecto, el Westminster Hall. El *South American Journal*, un periódico de los “yuppies” de la época dedicado a los inversionistas en Sudamérica, envió a un cronista a la acalorada reunión. El número de mayo de 1891 transcribe el informe de ese cronista, en letra pequeña y sin darle mayor trascendencia. El reportero detallaba las distintas intervenciones de los participantes del debate y entre ellas la de un tal Mr. Burstall, quien revisando las rendiciones de cuentas presentadas por los directivos de la empresa interrogó entre muchas otras cuestiones a su Presidente, el Honorable H.R. Grenfell (designado en el cargo por Lord Baring), si “las 322.000 libras esterlinas pagadas a Mr. Celman y Mr. Wilde podrían ser recuperadas”. La respuesta del Honorable no fue, como pudiera esperarse, “¡Señor, no sé de qué me está Ud. hablando!” sino infinitamente más sugestiva y teñida de la tan característica flema y humor inglés: “Creo que es

lo mismo que preguntar si el Rey James I devolverá lo recibido por la concesión del New River Canal” (informemos que esta última devolución era altamente improbable ya que el Rey James I, hijo de María Estuardo y sucesor en el trono inglés de Isabel I, había muerto tan solo unos 270 años antes de los sucesos que aquí relatamos...).

Curiosamente parece que esta irónica respuesta de Mr. Grenfell indignó, pero tan solo por su ignorancia sobre el pasado británico, a la dirección del *South American Journal*, quien la calificó en el siguiente número de “Historical Blunder”, algo así como un disparate histórico. Y justificaban tan violento calificativo relatando que el New River Canal, que atraviesa hasta el día de hoy desde el Támesis buena parte de Londres, fue una concesión por peaje otorgada por Isabel I a un tal Hugh Middleton para construirlo. Este inició las obras pero resultaron más costosas de lo previsto y se quedó sin recursos para finalizarlas. A consecuencia de ello interesó al respecto al sucesor de Isabel, James I, quien aportó del tesoro real los fondos para terminar el Canal y comenzar a cobrar los beneficios derivados del tráfico a través del mismo. En consecuencia y tal como correctamente explicaba el periódico, James para nada fue un coimero sino un socio inversor, un accionista, que cobraba a medida que entraban las ganancias, y en tal carácter siguieron cobrando sus herederos. En cambio, según el periódico, “Mr. Celman y Mr. Wilde” prefirieron tener su parte en “prompt cash”, a sea estrictamente por adelantado y en efectivo... Y señalaba el detalle obvio que tan sólo retiraron, no invirtieron.

El *South American Journal*, tal como señaláramos, no le dio ninguna trascendencia al tema y lo trató tan solo como una curiosidad histórica. Evidentemente a nadie en Londres podían sorprenderle por entonces sobornos en Sudamérica, pero cuando finalmente un barco trajo algunos ejemplares del periódico a Buenos Aires es de imaginarse el escándalo que aquí se produjo. Como vimos nadie dudaba de que se trataba de un gran negociado, pero que el tema se manejara con tanto desprecio en Europa no podía menos que herir el orgullo de las élites argentinas. *El Obrero*, en su lenguaje peculiar y combativo, lo señalaba con mucha sorna y particular elocuencia:

“La interpelación de Mr. Burstall importa una jugada de JAQUE al rey, a los miembros de la clase cuyos intereses defiende el partido gobernante, clase mas diabólica que no pudiera haber inventado el seso del mismo Satanás.. ¿La liga oficialista Pellegrini, Roca, Mitre seguirá garantizando la impunidad de los coimeros y de los ladrones públicos? Es que si no los defendieran terminarían por acusarse a sí mismos, pero si los siguen protegiendo piso-tean el honor del país y lo arrastran por el fango. De uno u otro modo están perdidos. JAQUE y MATE, señores caudillos. Se acabó el juego”.

Como sabemos los quizá ingenuos marxistas de entonces estaban muy equivocados y lamentablemente el juego estuvo lejos de acabarse. Los dirigentes políticos argentinos absorbieron como tantas otras veces el papelón y continuaron adelante con sus tropelías. El tema de las Obras Sanitarias empero siguió dando bastante que hablar en el futuro, resultando particularmente graciosas las respuestas del *South American Journal* a cartas de Juárez Celman pidiendo que se retractaran de la acusación de coimas. El ex presidente (y ex catedrático de Derecho en la Universidad de Córdoba) le señalaba a sus redactores que de no hacerlo los demandaría y que ellos inevitablemente perderían el juicio ya que, según les explicaba este prohombre del Derecho, “el soborno es siempre indemostrable, pues requeriría para comprobarlo el testimonio de quien pagó, quien a su vez con ello se autoincriminaría”. Con humor británico la réplica no demoró: “En Argentina, Mr. Celman, quizá sea indemostrable un soborno... Pero le aclaramos que aquí es diferente, se ha hecho muchas veces y los culpables están en la cárcel...”. Otra repercusión curiosa y que llama la atención es lo ocurrido con los títulos que como vimos debían saldar la deuda con los Baring. Era tal el desprestigio de la operación que asumido el nuevo gobierno de Luis Sáenz Peña (extraño personaje que le dio más de un dolor de cabeza a los acreedores argentinos) este había paralizado su entrega. La demora puso extremadamente nerviosos a los banqueros ingleses y a quienes eran sus garantes ante el Banco de Inglaterra: la casa Rothschild, quienes no vacilaron en solicitar al gobierno inglés el envío de algunos barcos de guerra para hacer entrar en razones a los incumplidores argentinos. La respuesta del li-

beral Primer Ministro Gladstone fue empero por demás elocuente: “El gobierno de Su Majestad no intervendrá con las armas para beneficiar a los súbditos que invirtieran imprudentemente en el extranjero”.

Y nos queda luego de tan sugestivas similitudes históricas y a título de reflexión final analizar los motivos de Juárez Celman para su política de privatizaciones que, como vimos mas arriba, era bastante inexplicable en la época y tantas resistencias generó. Diversos historiadores de las ideas, de todo el espectro ideológico, desde la derecha a la extrema izquierda, atribuyen a la ideología liberal del juarismo la motivación fundamental de esta actitud. Y lo ilustran con los numerosos y floridos discursos y artículos de los juaristas, que tan a tono con la época los matizaban con reiteradas citas de Spencer y demás filósofos del liberalismo y a la consiguiente necesidad de que el Estado interviniera lo menos posible en la economía. Los hechos que hemos descrito nos permiten, sin embargo, suponer que las motivaciones de la élite argentina de fines del siglo XIX (y no tan solo de entonces) probablemente tuvieron su origen en razones más pragmáticas, más contundentes que las ideologías. En el caso de las Obras Sanitarias por ejemplo, quizá 322.000 veces más contundentes.



Dirk Kerst Koopmans